



Consejo Económico y Social

Distr. general
7 de diciembre de 2017
Español
Original: inglés

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

62º período de sesiones

12 a 23 de marzo de 2018

**Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y del vigésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea
General, titulado “La mujer en el año 2000:
igualdad entre los géneros, desarrollo y paz
para el siglo XXI”**

**Declaración presentada por Congregations of St. Joseph,
Fondazione Proclade Internazionale - Onlus, Sisters of
Charity Federation, Society of Catholic Medical
Missionaries y VIVAT International, organizaciones no
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas
por el Consejo Económico y Social***

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

* La presente declaración se publica sin revisión editorial.



Declaración

Introducción

Congregations of St. Joseph, Fondazione Proclade Internazionale-Onlus, Society of Catholic Medical Missionaries y VIVAT International están presentes en más de 130 países. Muchos de nuestros miembros trabajan directamente con mujeres y niños rurales.

Las mujeres son indispensables para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, especialmente la erradicación de la pobreza y el hambre. Se calcula que el 70% de los pobres del mundo son mujeres, de las cuales unos 1.600 millones son mujeres rurales. Representan más de una cuarta parte de la población total y dos tercios de todas las personas analfabetas del mundo. Las condiciones climáticas extremas y el clima cambiante reducen aún más el acceso de las mujeres a la tierra, el agua y la energía. Las mujeres y las niñas rurales se ven obligadas a dedicar una parte importante de su tiempo a la recogida de combustible y agua. Puesto que la mayoría de los pobres viven en zonas rurales, es fundamental revitalizar el sector agrícola, promover el desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria, sobre todo en los países en desarrollo. Las mujeres y las niñas rurales, que son las más vulnerables, deberían poder hacer realidad todo su potencial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los dirigentes hicieron hincapié en la necesidad de la participación y el empoderamiento de las mujeres como medio de lograr el desarrollo y el progreso. La mayoría de los países garantizan en sus constituciones la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, la igualdad entre los géneros sigue siendo un sueño lejano en la mayor parte de los países. El Primer Ministro de las Islas Salomón señaló que la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo a la igualdad de género en las oportunidades económicas y los medios de vida. La Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia instó a todos los países a tener su propia política feminista que garantice la igualdad entre mujeres, hombres, niños y niñas.

Empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales

Las feministas introdujeron el término “empoderamiento de las mujeres” en el léxico del desarrollo a mediados de la década de los ochenta desde el Sur Global. Entendían el “empoderamiento” como la tarea de “transformar la subordinación de género”, la desintegración de “otras estructuras opresivas” y la “movilización política” colectiva. Las experiencias cotidianas de las mujeres de las zonas rurales atestiguan que, sin cambios políticos, las estructuras que discriminan a las mujeres no pueden desmantelarse; todos los avances que consigan serán insostenibles. Los programas de las organizaciones de desarrollo deben evaluarse en función de si permiten a las mujeres aumentar su potencial de movilización política, de manera que puedan lograr una igualdad entre los géneros sostenible. La creación de capacidad y un entorno propicio para las mujeres son elementos indispensables para su participación efectiva. Por lo tanto, la igualdad de representación de las mujeres en los órganos decisorios es necesaria para promover la justicia de género, así como la buena gobernanza.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los pequeños agricultores producen gran parte de los alimentos del mundo, y el 90% de las explotaciones agrícolas del mundo son administradas por familias, en especial mujeres y niñas rurales, que cultivan el 80% de nuestros alimentos. El 43% de la fuerza de trabajo del sector agrícola mundial lo conforman mujeres rurales.

El Índice Global del Hambre de 2017 señala que la desigualdad de género es uno de los “ejes [...] reconocidos de la desigualdad nutricional”, dado que las mujeres y las niñas representan el 60% de las personas que padecen hambre en el mundo. Además, la falta de independencia de las mujeres en la sociedad y los hogares está estrechamente vinculada a la salud y el bajo peso al nacer de sus hijos. Una buena nutrición es fundamental para empoderar a las niñas a fin de que crezcan, aprendan, se ganen la vida y lleven la iniciativa. Cuando una niña está sana y bien alimentada, puede destacar en la escuela y crecer para convertirse en una líder en su comunidad. Puede aprovechar las oportunidades que se le ofrecen y llegar a ser todo lo que se proponga.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los pequeños agricultores es la pérdida de sus medios de vida ante el apoderamiento de la tierra y el agua por parte de grandes empresas multinacionales, a menudo con el apoyo del Gobierno. El agua se ha convertido en el nuevo oro y la agricultura industrial ha privado a los pequeños agricultores del acceso a los recursos naturales. Apoyar a los pequeños agricultores, en su mayor parte mujeres rurales, proporcionándoles tierras y acceso a la financiación puede aumentar la producción alimentaria, lo que a su vez garantiza la seguridad alimentaria local. Los pequeños y medianos agricultores y las mujeres indígenas necesitan apoyo financiero, así como el derecho a poseer sus tierras.

Función de la inclusión financiera en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales

En el párrafo 6 de la Agenda de Acción de Addis Abeba, que la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya en 2015, se reitera la necesidad de incorporar la perspectiva de género, en particular de medidas e inversiones con fines específicos en la formulación y aplicación de todas las políticas financieras, económicas, ambientales y sociales. Además, los países volvieron a comprometerse a adoptar políticas racionales, legislación aplicable y medidas transformativas y a fortalecer las existentes, para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles, asegurar su igualdad de derechos, acceso y oportunidades de participación y liderazgo en la economía y eliminar la violencia por razón de género y la discriminación en todas sus formas.

El párrafo 13 se refiere a la ampliación de los esfuerzos para poner fin a la malnutrición mediante el reconocimiento de la función complementaria de los niveles mínimos de protección social, aumentando la inversión pública en la financiación de la investigación, la infraestructura y las iniciativas en favor de los pobres.

El párrafo 21 dispone lo siguiente: “Hay pruebas de que la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su participación plena e igual en la economía y en el liderazgo de esta son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y mejoran de manera significativa el crecimiento económico y la productividad”.

Los datos como punto de inflexión

El 80% de los 230 indicadores elaborados en 2016 por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas que abordaban de manera explícita o implícita la igualdad de género, creados para hacer un seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género), carecen de normas internacionales de medición aceptadas. Además de los datos tradicionales reunidos por los Gobiernos nacionales, es necesario reconocer los datos generados por los ciudadanos procedentes de organizaciones comunitarias a nivel de aldea, distrito y consejo local, en las que, de manera global, se estima que había un 20% de representación femenina.

Mano de obra infantil en la agricultura

Más de la mitad de los niños que trabajan, es decir, 85 millones de niños, llevan a cabo trabajos peligrosos y el 59% de ellos trabajan en el sector agrícola. Las niñas han avanzado más que los niños, pues el número de niñas que trabajan disminuyó en un 40% en el período de 2000 a 2012, en comparación con una reducción del 25% en el caso de los niños, según se señala en el informe del Secretario General titulado “Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Los niños tienen derecho a la educación, no al trabajo infantil.

La migración y su repercusión en las mujeres rurales

Uno de los desafíos más complejos que enfrenta el mundo hoy en día radica en los grandes movimientos de población, ya que se ha producido un enorme aumento en el número de personas que emigran en todo el mundo. Alrededor de una tercera parte de todos los migrantes internacionales tienen entre 15 y 34 años. Cerca de la mitad son mujeres. El cambio climático, la violencia y los conflictos son los principales factores que impulsan la migración forzada.

La inseguridad alimentaria es uno de los principales motivos que subyacen a la migración forzada tanto a nivel nacional como internacional. Las madres y los niños, especialmente en las zonas rurales, son los más afectados por la inseguridad alimentaria. El Día Mundial de la Alimentación de este año gira en torno al tema de la migración y la importancia de invertir en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, a fin de que las personas no tengan que dejar atrás sus vidas y emprender travesías a menudo peligrosas hacia lo desconocido. Los efectos de la migración forzada en las mujeres y las niñas son graves y requieren un enfoque claro en las políticas, como el Pacto Mundial para la Migración. Las crecientes tendencias de discriminación y explotación, que incluyen el trabajo forzoso, la violencia sexual, la trata y las situaciones laborales inseguras, violan su dignidad y sus derechos humanos.

La migración inducida por el cambio climático obliga a las personas a salir de sus aldeas, dirigirse hacia las ciudades y cruzar las fronteras en busca de medios de vida. Los niños suelen perder o retrasar su educación al migrar a un nuevo lugar o país y se convierten en víctimas del trabajo infantil y otras formas de explotación. Además de socorro inmediato, se requieren soluciones a largo plazo para prevenir la migración, con una buena gobernanza y un desarrollo rural centrados en el empleo y las oportunidades empresariales.

Recomendaciones

Congregations of St. Joseph, Fondazione Proclade Internazionale-Onlus, Society of Catholic Medical Missionaries y VIVAT International instan a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y los Estados miembros a realizar lo siguiente:

- proteger la tierra de los pequeños agricultores y proporcionarles apoyo financiero que incluya niveles mínimos de protección social;
- promulgar y aplicar marcos jurídicos que garanticen la propiedad de la tierra por parte de las mujeres;
- garantizar la participación de las mujeres rurales (no menos del 50%) en los órganos decisorios, especialmente a nivel local;
- obtener datos desglosados por sexo sobre la financiación pública invertida en programas en favor de los pobres en apoyo de las mujeres y las niñas rurales;
- prohibir el trabajo infantil y garantizar la educación gratuita y obligatoria para todos los niños, especialmente las niñas, en todos los países;
- promover el desarrollo rural proporcionando educación, creando oportunidades comerciales y empleos para los jóvenes y prácticas agrícolas resilientes al clima para las mujeres como componente esencial de la respuesta al desafío de la migración que obliga a las personas a desplazarse;
- obtener datos específicos de género que pongan de relieve las causas, los efectos y las tendencias migratorias que conducen a los desplazamientos internos;
- hacer frente a los efectos específicos de género de la migración forzada e incorporar a las mujeres y las niñas migrantes como una categoría específica en las políticas y los marcos jurídicos nacionales.